



Contribuciones desde Coatepec

ISSN: 1870-0365

rcontribucionesc@uaemex.mx

Universidad Autónoma del Estado de México
México

Monroy García, Juan
Los partidos políticos y la democracia en Nicaragua
Contribuciones desde Coatepec, núm. 5, julio-diciembre, 2003, pp. 115-130
Universidad Autónoma del Estado de México
Toluca, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28100507>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Los partidos políticos y la democracia en Nicaragua

JUAN MONROY GARCÍA

Facultad de Humanidades, UAEMÉX

El conjunto de transformaciones del mundo contemporáneo, representado por la caída del socialismo real, el fin de la guerra fría y la globalización económica fueron de singular importancia para América Latina y sus relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica (EE UU). Estos acontecimientos, que repercutieron durante la década de los noventa en la política norteamericana, permitieron —como había sido tradicional— espacios de injerencia en la región. Pese a que desapareció la confrontación ideológica entre la Unión Soviética y los EE UU, este país siguió insistiendo en el enfrentamiento del “mundo libre” contra “el comunismo y los regímenes autoritarios de la región”. A partir de estos argumentos, EE UU justificó sus ataques a Nicaragua, afirmando que los sandinistas eran un grupo marxista-leninista cuyo único sustento eran el autoritarismo y la fuerza militar, que se había apoderado del poder político en contra de la voluntad de la mayoría de la sociedad, y que se mantenía en el mismo por la fuerza, pasando por alto los derechos y libertades individuales.

En la década de los ochenta, el enfrentamiento ideológico entre los EE UU y la Unión Soviética tuvo su expresión en América Latina a partir del ataque contra los gobiernos nacionalistas, como el régimen sandinista de Nicaragua. La política norteamericana tuvo la firme intención de revertir el proceso revolucionario e impedir que otros países de la región tomaran el ejemplo nacionalista. Para la política estadounidense, los regímenes que escapaban a su esfera de influencia eran marxistas-leninistas y autoritarios, contrarios a los principios de libertad y democracia.

El presente artículo tiene como objetivo fundamental analizar el proceso democrático en Nicaragua durante la década de los noventa, haciendo hincapié en los factores internos y destacando que los cambios políticos fueron producto

de las fuerzas políticas endógenas, más que resultado de acontecimientos exógenos. De manera especial, se analiza la historia reciente de los partidos políticos, donde resalta el papel del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como principal motor del proceso democrático en dos momentos importantes del país: mientras estuvo en el poder y como partido de oposición. Desde el poder porque inició la transición y convocó a elecciones, independientemente de la incertidumbre de los resultados, y como partido opositor porque ha estimulado la participación democrática de la sociedad nicaragüense.

Durante la década de los ochenta, el gobierno estadounidense justificó sus ataques contra el FSLN, así como el apoyo a los grupos contrarrevolucionarios, el bloqueo económico, el minado de los puertos y sus amenazas de invasión contra Nicaragua, a partir de tipificar a los sandinistas como un grupo marxista-leninista, autoritario, que impedía el avance democrático en Centroamérica; también dedicó grandes espacios para difundir esta imagen en diversos foros y a través de todos los medios a su alcance. Cabe aclarar que la temática de la política intervencionista estadounidense hacia Nicaragua escapa al objetivo del presente artículo.

A medida que el régimen sandinista fue perdiendo consenso, los grupos políticos de la derecha nicaragüense y las organizaciones contrarrevolucionarias endurecieron sus ataques contra el FSLN, calificándolo con los mismos adjetivos empleados por el gobierno estadounidense; al mismo tiempo procuraron presentar su imagen —ante la opinión pública internacional, lo mismo que al interior del país— como paladines de la libertad y garantes de la democracia en la región.

Por otra parte, los partidos políticos de la derecha nicaragüense y los grupos contrarrevolucionarios también declararon que sus anhelos más sentidos eran la “libertad y la democracia” para el país; pero que su falta de éxito se debía a la resistencia sandinista, a la que habían enfrentado por largos años en la búsqueda de espacios de participación política. Sin embargo, hay que señalar que, en la práctica, estas fuerzas políticas y militares buscaron el poder no precisamente por la vía electoral, por el contrario, casi siempre prefirieron el camino violento de las armas, haciendo a un lado la propuesta de apertura democrática de los sandinistas; contando en todo momento con el apoyo del gobierno estadounidense.

La política norteamericana encontró en estos grupos contrarrevolucionarios la respuesta adecuada para implementar sus ataques permanentes hacia el régimen sandinista. Dichos grupos se encargaron de organizar la guerra de baja intensidad en territorio nicaragüense, contando siempre con el apoyo económico y la asesoría militar de los EE UU.

La visión del FSLN fue contraria a la estadounidense y la de los grupos de la derecha nicaragüense, pues —en alianza con otras fuerzas políticas igualmente

comprometidas con los mismos ideales de libertad y democracia— trató de impulsar el avance democrático en Nicaragua. Las diferentes tendencias del Frente coincidieron en impulsar el proceso de apertura democrática, para lo cual organizaron, durante la década de los ochenta, dos procesos electorales. También hay que señalar el interés permanente de los sandinistas por democratizar el partido, las organizaciones de masas, y en general la vida política del país, pese a los obstáculos generados por la crisis económica, las constantes amenazas del gobierno norteamericano y los ataques de los grupos contrarrevolucionarios.

A pesar de las adversidades económicas y sociales por las que atravesaba el país —en parte provocadas por las agresiones del gobierno de EE UU y los ataques de los grupos contrarrevolucionarios, en contra del gobierno y de la población civil—, los sandinistas mostraron una vez más su vocación democrática, convocando a dos procesos electorales —el 4 de noviembre de 1984 y el 25 de febrero de 1990—, demostrando con hechos que la imagen autoritaria y antidemocrática que habían difundido el gobierno estadounidense y los grupos contrarrevolucionarios no correspondía a la realidad. La preparación de los comicios de 1984 inició desde principios de año, enfrentando fuertes críticas por parte de la Coordinadora Democrática Nicaragüense, organismo antisandinista de fuertes nexos con las organizaciones contrarrevolucionarias, que puso como condición para participar la supervisión de las elecciones por parte del grupo Contadora y de la Organización de Estados Americanos.

La falsa imagen de democracia y libertad que trataron de difundir tanto el gobierno estadounidense como dichos grupos contrarrevolucionarios era contraria en los hechos, donde privó la intolerancia y el autoritarismo; estos grupos trataron de tomar el poder durante la década de los ochenta, a través de la violencia, atacando a la población civil y destruyendo importantes elementos de la vida productiva del país. Los grupos políticos de la derecha nicaragüense trataron de llegar al poder a través de los mismos medios, desdeñando los comicios convocados por los sandinistas, argumentando que desconfiaban de la imparcialidad y credibilidad de los órganos electorales.

En la estructura interna del FSLN, las fuerzas democráticas partidarias de la apertura política en el país —las cuales transformaron radicalmente la cultura política y la concepción tradicional del poder, que por largas décadas habían predominado en la sociedad nicaragüense— lograron imponerse a las autoritarias. Frente a las que proponían un gobierno fuerte, las fracciones que posibilitaron la transición democrática ofrecieron mayores argumentos para consolidar su proyecto.

Esta interpretación contrasta con las muy conocidas referentes a las olas de la democracia y las transiciones a ésta desde regímenes autoritarios planteadas por Samuel Huntington —*La tercera ola, la democratización a finales del siglo*

xx— y las ideas señaladas por Guillermo O'Donnell y Philippe Schmitter —*Transiciones desde un gobierno autoritario*— cuya argumentación toma en cuenta determinados acontecimientos de Europa y América Latina: parten del supuesto de que en la historia hay etapas de gobiernos autoritarios y periodos de avance democrático, consideran que estos últimos acontecimientos son producto de olas de democracia que envuelven al mundo, y afirman que la tercera ola —iniciada en la década de los setenta del siglo XX— está aún vigente.

La tesis que sostenemos en el presente artículo es que las condiciones propias de Nicaragua, donde existieron décadas de gobiernos dictatoriales, impidieron la participación política de los partidos y de la sociedad en su conjunto, surgiendo como consecuencia frentes amplios que buscaron la participación política a partir del aglutinamiento de fuerzas políticas de diversos signos, como el FSLN y la Unión Nacional Opositora (UNO). Como consecuencia, y por la composición de dichos frentes, se generó el surgimiento de nuevos partidos políticos. Al perder el poder, el FSLN —por sus características de ser precisamente un frente político de composición social plural y no un mero partido político— tendrá sucesivas transformaciones.

Para la elaboración del artículo hicimos un recuento de la bibliografía y hemerografía publicadas en Nicaragua y en otros países centroamericanos sobre el proceso de fragmentación del FSLN. Así, nos hemos remitido a las fuentes escritas que ofrecen algunos dirigentes sandinistas —quienes relatan sus memorias y explican los hechos—, asimismo, consultamos los pocos estudios que existen sobre el tema; sin embargo, debemos advertir que estos trabajos tienen clara inclinación por alguna de las fracciones, por ser partícipes de los acontecimientos que tratan de juzgar. Bajo esta consideración, señalamos algunas fuentes consultadas, como la obra de Nayar López Castellanos —*La ruptura del frente sandinista*— cuyo análisis se inclina a favor de las propuestas del Movimiento de Resistencia Sandinista; otro texto que también explica dicho momento es *Consenso y negociación en el FSLN* —escrito por Víctor Hugo Tinoco—, donde el autor forma parte del proceso de fragmentación, lo que se nota a través de sus críticas y análisis, que carecen de la firmeza y la profundidad requeridas; otro sandinista que aborda el asunto es Sergio Ramírez, quien expresó su punto de vista en el libro *Adiós muchachos, una memoria de la revolución sandinista*, pero también insuficiente en su profundización.

En torno al periodo de gobierno de Violeta Barrios (1990-1996) existen investigaciones importantes en el campo de la economía, orden social, delincuencia, desarme militar, pobreza en el campo y la ciudad; pero estos trabajos carecen de una visión de conjunto sobre los logros y retrocesos del régimen, también es notable la carencia de un balance sobre la transición democrática del

país. Entre los trabajos con estas características destacan *Transición política y reconversión militar en Nicaragua, 1990-1995* de Roberto Cajina, *Orden social y gobernabilidad en Nicaragua 1990-1996* de Elvira Cuadra *et al.*, *La guerra y el campesinado en Nicaragua* de Orlando Núñez *et alii* y dos libros de Óscar René Vargas —*Pobreza en Nicaragua: un abismo que se agranda* y *Entre el laberinto y la esperanza (Nicaragua 1990-1994)*—, en los que presenta su interpretación sobre el crecimiento de la pobreza y marginalidad a partir de indicadores económicos. También, cabe señalar que existe una diferencia notable entre los abundantes estudios sobre el sandinismo como organización revolucionaria y como partido en el poder, frente a los escasos trabajos de su actuar en la oposición.

Hemos dividido el artículo en cuatro partes. En la primera ofrecemos una sucinta explicación de la política intervencionista, empleada por el gobierno estadounidense, en contra del régimen sandinista durante la década de los ochenta, haciendo hincapié en algunos factores —como la guerra de baja intensidad—¹ tanto de los grupos contrarrevolucionarios, como de las propias tropas norteamericanas, que, si bien intervinieron directamente sólo en contadas ocasiones, permanentemente ofrecieron asesoría, apoyo militar y financiero a los grupos contrarrevolucionarios a través de organismos como la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

En este apartado también se analizan dos elementos más de la política agresiva estadounidense: el minado de los principales puertos nicaragüenses y el embargo económico, acciones que repercutieron rotundamente en la maltrecha economía del país. Por otra parte, se destacan los apoyos financieros y militares del gobierno estadounidense en favor de los diferentes grupos contrarrevolucionarios, que sirvieron de base para los constantes ataques contra el régimen sandinista. Para este apartado consultamos algunos documentos del gobierno estadounidense, como los comunicados hechos por el teniente coronel de las fuerzas armadas norteamericanas, Oliver North, quien se encargó de la recaudación y operación de los recursos económicos para los grupos contrarrevolucionarios; también examinamos algunos escritos del Secretario de Defensa de la administración Reagan, Caspar Weinberger; asimismo consultamos la ponencia presentada por Néstor Sánchez² en la Universidad de Miami en enero de 1988; por último, leímos los textos de Lilia Bermúdez y Gregorio Selser, porque consideramos que ambos mostraban de manera importante la injerencia de los EE UU.

1 Forma en que EE UU organizó sus ataques contra territorio nicaragüense valiéndose del apoyo de los gobiernos de los países vecinos que permitieron las maniobras militares desde su territorio.

2 En la década de los años ochenta, Néstor Sánchez fungió como jefe de la división para Latinoamérica del Directorio de Operaciones de la CIA, y después fue delegado adjunto del secretario de Defensa para asuntos latinoamericanos.

No recurrimos a otras fuentes estadounidenses porque consideramos que ya estaba suficientemente demostrada la injerencia de este país en los asuntos del pueblo nicaragüense y, además, nos apartaban de nuestro objetivo fundamental que era destacar el desarrollo de las fuerzas democráticas internas.

La segunda parte se ocupa del FSLN como grupo político que pasó del poder a la oposición, y de ésta a la fragmentación. En esta parte hacemos un análisis de los factores y las causas por las cuales los sandinistas perdieron el poder en febrero de 1990, mencionando la caída del socialismo real, la guerra de baja intensidad, el embargo económico y el minado de puertos como causas externas que repercutieron en el ánimo y la voluntad de la gente para retirar el apoyo al FSLN. También enumeramos los errores políticos, económicos y sociales cometidos por el gobierno sandinista; un tercer factor no menos importante es el de la crisis económica que afectó principalmente a las masas trabajadoras, base fundamental del sandinismo. Es importante señalar que después de la derrota electoral privaron el desencanto y la desilusión, lo que derivó en una apatía generalizada entre los sandinistas, que no encontraban el rumbo político. Aunque las bases del partido iniciaron un proceso de críticas y propuestas de democratización, se enfrentaron a las inercias y las viejas prácticas autoritarias de las cúpulas.

La crisis económica que afectó al país en la década de los ochenta, los errores económicos y políticos de los sandinistas, así como la guerra de baja intensidad provocada por los EE UU y protagonizada por los grupos contrarrevolucionarios, deterioraron el consenso del régimen sandinista, provocando su derrota electoral.

A partir de entonces, el FSLN trató de convertir al Ejército Popular Sandinista (EPS) en un organismo garante y vigilante del proyecto revolucionario; pero el gobierno de Violeta Barrios exigió a su vez profesionalismo y lealtad a dicha institución, fue así que el EPS se convirtió en una corporación que sufrió un proceso de profesionalización y dejó de ser un aparato al servicio del sandinismo, para convertirse en un organismo de colaboración con el poder del Estado, lo que provocó que actuara en ocasiones en contra de las masas trabajadoras sandinistas, que defendían sus intereses a través de huelgas, tomas de tierras y edificios públicos.

El fracaso electoral tomó por sorpresa a los sandinistas, dejando pendientes algunos puntos importantes, como el de los bienes urbanos y rurales que se habían repartido durante su gobierno, y que no fueron debidamente regularizados.³ El FSLN trató de subsanar sus errores a través de decretos expedidos en último momento, dando pie a los abusos de algunos sandinistas y a los reclamos de los antiguos dueños. Con el fin de solucionar dos asuntos de primer orden para la burguesía —el conflicto de la propiedad y el asunto de la privatización—, el

³ En ocasiones, esas propiedades estaban a nombre de sus antiguos dueños.

nuevo gobierno quiso llegar a acuerdos con el FSLN, para lo cual convenció a los sandinistas de tratar dichos temas en forma conjunta, con lo que se lograría el consenso en la Asamblea Nacional y se evitarían obstáculos para el proceso privatizador.

Grave error del régimen sandinista fue no haber regularizado buena parte de las propiedades que repartió, motivando un conflicto más para el nuevo gobierno. Ante la solicitud de las masas trabajadoras de que se regularizaran debidamente sus propiedades —a fin de tener mayor seguridad y estabilidad social—, el régimen de Violeta Barrios trató de resolver el problema conjuntamente con la privatización, que era una exigencia de la burguesía, obligando a los sandinistas a aceptar su propuesta de solución, que no fue la más adecuada para las grandes mayorías. El error sandinista también motivó que, poco antes de entregar el poder, algunos de ellos abusaran adueñándose de propiedades urbanas o rurales, cayendo en el desprestigio ante el resto de militantes y ante la sociedad en su conjunto.

El fracaso electoral provocó una crisis interna en el FSLN, lo que se manifestó en el surgimiento de nuevas corrientes ideológicas, con importantes declaraciones de crítica hacia el autoritarismo y el abuso de poder. Las bases sandinistas exigieron un replanteamiento del proyecto, a fin de que se convirtiera en una alternativa viable para la sociedad nicaragüense, sin embargo, las discusiones que se generaron en las bases no encontraron siempre la respuesta adecuada dentro de las cúpulas, que seguían aferradas al viejo autoritarismo de la década de los setenta.

Otra de las consecuencias del descalabro electoral para el FSLN fue la división interna, que empezó a notarse desde las primeras reuniones en que los militantes cuestionaron a la cúpula del partido, responsabilizándola de la derrota. Las actitudes contradictorias de los dirigentes sandinistas, de colaboración y crítica hacia el nuevo gobierno, también fueron objeto de fuertes comentarios por parte de militantes. Por otra parte, dentro de la cúpula sandinista surgió una división entre los ortodoxos o principistas y los pragmáticos o renovadores; los primeros buscaban mantener las estructuras, las estrategias y la línea política del partido sin modificaciones profundas, mientras que la segunda fracción pretendía la transformación del partido, cambiando sus relaciones con la sociedad, el gobierno y otros sectores políticos.

El primer congreso del FSLN celebrado en julio de 1991 tuvo como propósitos renovar la dirigencia nacional del partido, redefinir su estructura y su nueva plataforma programática. La experiencia democrática que se vivió como preparación del congreso fue importante, con la participación amplia de militantes que se encargaron de nombrar a sus representantes para dicho suceso, pero en el desarro-

llo del congreso la cúpula sandinista echó por la borda toda esa experiencia democrática, imponiendo sus criterios y principios, evitando la libre discusión de las ideas.

Estas dos corrientes del FSLN, los tradicionalistas o ortodoxos y los renovadores o pragmáticos, tuvieron fuertes enfrentamientos. Los primeros emplearon un discurso radical de no abandonar las reivindicaciones de las masas trabajadoras, ni las viejas banderas de lucha, y señalaron como formas de lograr las demandas para los trabajadores la huelga, la toma de tierras, de calles y ciudades, incluso, no descartaron la vía armada para volver al poder. Pero en los hechos sus trabajos fueron vacilantes y opuestos a las masas trabajadoras, que reclamaban mayores compromisos de la cúpula, para tratar de evitar la imposición de la política económica neoliberal y el empobrecimiento de grandes capas de la población. A esta corriente le preocupaba sobremanera recuperar el poder, por ello se aferraba a aquellos espacios que aún conservaba, y trató de gobernar junto con el nuevo gobierno.

La otra corriente, la renovadora, utilizó un lenguaje diferente, indicando que era necesario transformar el programa y el discurso del partido de acuerdo con los nuevos tiempos, tanto del mundo como del país, también consideró necesario reconquistar el poder, pero a través de la lucha parlamentaria y democrática. Asimismo le preocupó gobernar conjuntamente con el nuevo gobierno, porque lo consideraba un gobierno de centro.

Los dirigentes del FSLN también se dividieron, principalmente por la disputa del poder político y económico; algunos intelectuales y miembros de la pequeña burguesía mostraron su descontento con las formas tradicionales de tomar decisiones dentro del partido, y consideraron que el proyecto político no era el adecuado para las circunstancias del país, por ello empezaron a cuestionar todas las decisiones de la Dirección Nacional, y empezaron a hablar de la construcción de un nuevo partido cuyas características estuvieran acordes con los nuevos tiempos que se vivían en el mundo y en la sociedad nicaragüense. La pugna de estas dos nuevas corrientes era principalmente por espacios de poder dentro del partido y del gobierno. Ambas posiciones trataron de dar respuesta a las exigencias de las masas sandinistas, que señalaron la falta de claridad en sus críticas y proyectos alternativos al gobierno neoliberal de Violeta Barrios, pero la respuesta de ambas posiciones no fue una alternativa real para las expectativas de las masas trabajadoras.

La composición social plural de los militantes del FSLN polarizó en diferentes momentos las diversas fracciones, al grado tal que tuvo que intervenir la dirigencia del partido para discernir en los conflictos entre trabajadores y empresarios sandinistas. El congreso extraordinario de mayo de 1994, fue precedido de un intenso debate entre las corrientes del sandinismo, debate que se prolongó durante algunos meses después; dicho congreso tuvo como fin, al igual que el de

1991, nombrar a la dirigencia nacional del partido, definir el programa, y reformar los estatutos. Las dos corrientes encontrarán mayores espacios de expresión después del congreso, dándose a conocer como Izquierda Democrática y Movimiento de Renovación Sandinista. Estas corrientes se separaban cada vez más en sus planteamientos. La primera fue la fracción que a principios de la década de los noventa se conoció como ortodoxa o principista, y que adoptó un discurso apegado a las demandas populares y reivindicaba el pasado del sandinismo. La segunda corriente, reconocida también como pragmática o renovadora, habló de fortalecer el régimen parlamentario, transformar la estructura y principios del partido.

La división dio origen al Movimiento de Renovación Sandinista integrado principalmente por intelectuales y fracciones de la pequeña burguesía, que habían criticado el autoritarismo de la cúpula sandinista, y que fueron objeto de hostigamiento y represión por parte de ésta; de tal manera que para las elecciones de octubre de 1996 el Movimiento de Renovación se presentó como una opción separada del FSLN, pero los resultados electorales fueron muy magros para dicha opción.

El Movimiento de Renovación Sandinista surgió formalmente el 10 de diciembre de 1994 como un grupo político escindido del FSLN; tuvo su antecedente inmediato en la corriente renovadora o pragmática; estuvo integrado principalmente por intelectuales y fracciones de la pequeña burguesía, que criticaron tenazmente a la cúpula sandinista por su falta de voluntad para cambiar, consideraron que al interior del partido no existían posibilidades de transformar el proyecto político y las estructuras del gobierno. Sin embargo, este nuevo partido no logró consolidarse como una opción viable para el país, su oferta política resultó poco atractiva para la mayoría de la sociedad nicaragüense, ni siquiera para algún sector importante de la misma.

El FSLN realizó algunos intentos por democratizar el proceso de selección de candidatos, haciendo una consulta a la sociedad, pero el manejo poco ético de los resultados de dicha consulta empañó el proceso, dando como resultado que el congreso ordinario de mayo de 1996 tuviera como tónica la impugnación y acusaciones de deshonestidad electoral; sin embargo, estos hechos no mermaron sustancialmente sus resultados electorales en el mes de octubre.

El FSLN con el fin de definir su proyecto político, su programa y su plan de acción como partido de oposición, efectuó dos congresos ordinarios y uno extraordinario: los resultados fueron magros. En las reuniones preparatorias hubo discusiones abundantes en ideas y se vivía un ambiente de participación democrática, que después contrastaba con la actividad misma del congreso, donde lo que se imponía era la disciplina dictada por la cúpula partidista, frustrando los intentos por profundizar el proceso democrático en los órganos de decisión; el Frente mantuvo su autoritarismo al interior del partido, independientemente de que en el país impulsó un proceso democrático sustancial.

El FSLN, como partido de oposición, no logró implementar una propuesta alternativa de gobierno que tuviera aceptación en la mayoría de la sociedad; los compromisos de la cúpula con el gobierno de Violeta Barrios impidieron que los sandinistas pudieran implementar una crítica férrea y coherente a la política económica del nuevo régimen, conformándose con hacer sugerencias para transformar dicha política. Además, el juego de intereses diversos de carácter económico y político, que se daba al interior del partido, fueron generando mayores diferencias entre los sandinistas de la cúpula y las masas trabajadoras o desempleadas, provocando divisiones y enfrentamientos importantes que se van a expresar a lo largo de la década de los noventa.

En la tercera parte del artículo analizamos la UNO, como un grupo político que pasa de la contrarrevolución al poder, y del poder a la fragmentación. En esta parte se analiza el origen de la UNO como una alianza de partidos y grupos político-militares que buscaron el poder a través de diversos medios, electorales o violentos, y que contaron con el apoyo económico y asesoría militar del gobierno estadounidense; en este apartado también se señala cómo los antiguos dirigentes de la contrarrevolución pasaron a ser parte del nuevo gobierno. La UNO fue desde sus orígenes una alianza muy endeble, porque los partidos y grupos antepusieron sus bienestar personales o de grupo, a los intereses generales del país, buscando ante todo beneficiarse con el poder; el proceso para la selección de su candidato a la presidencia del país fue una clara muestra de esa disputa por intereses personales, los integrantes de la UNO pusieron en peligro su unidad, logrando mantenerla mediante la intervención del gobierno estadounidense.

Surgió así la candidatura de Violeta Barrios, hija de una familia terrateniente del departamento de Rivas, viuda de Pedro Joaquín Chamorro, quien fuera militante conservador y periodista, fuerte opositor de la dictadura somocista, asesinado en enero de 1978; dicha candidatura representaba la oposición al pasado y la esperanza de un mejor futuro, su discurso de reconciliación nacional tuvo amplia aceptación entre las masas trabajadoras y las capas medias que vislumbraban en su propuesta la posibilidad de la pacificación; esta candidata representaba también la negación del somocismo y el sandinismo, con todos los aspectos negativos de dichos regímenes, como la crisis económica y la guerra permanente. La mencionada candidatura tuvo como sustento un importante grupo de asesores preparados fuera del país y empapados de las nuevas teorías tecnócratas. Durante la campaña fueron notables las diferencias entre las dos fracciones de la Unión; la moderada, representada por la candidata a la presidencia y la segunda, más radical, encabezada por Virgilio Godoy Reyes, dirigente del Partido Liberal Independiente, abogado y sociólogo, ministro del trabajo en la administración de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de 1979 a 1984; dicha fracción estaba

ligada a los grupos políticos conservadores y las fracciones que habían intentado tomar el poder por métodos golpistas. Con el triunfo de Violeta Barrios en los comicios de febrero de 1990, los conflictos internos se agudizaron al interior de la Unión.

La UNO, por su parte, surgió como producto de la unidad de varios partidos y grupos de diferentes signos políticos, pero con un objetivo común: derrotar al FSLN en las elecciones de febrero de 1990, a este proyecto se unieron los grupos contrarrevolucionarios, las cúpulas empresariales, la jerarquía eclesiástica, y el gobierno estadounidense; esta alianza electoral fue muy endeble, con frecuencia surgieron al interior fuertes disputas por el poder, donde salían a relucir denuncias de corrupción y pactos secretos, estas disputas se agudizaron después del triunfo electoral, provocando divisiones e intentos de golpe de Estado por parte de la fracción más radical, representada por Virgilio Godoy.

Entre el nuevo gobierno y el FSLN existieron algunos acuerdos de gobernabilidad; dos días después de las elecciones iniciaron las conversaciones entre ambas instancias, dando como resultado los Acuerdos de Transición que tuvieron como fin evitar conflictos políticos y militares durante los primeros meses del gobierno de Violeta Barrios, así como consolidar algunos espacios de poder en manos de los sandinistas, como las fuerzas armadas y la fracción parlamentaria; dichos acuerdos generalmente fueron suscritos en contra de la voluntad de la otra fracción de la UNO, que pretendía suprimir de todos los espacios de poder a los sandinistas.

Los Acuerdos de Transición firmados por el Ejecutivo y el FSLN, generaron diferentes expectativas para ambos organismos; para el nuevo gobierno significó orden y paz social, pero sobre todo, gobernabilidad y estabilidad, imagen y prestigio de gobierno equilibrado y maduro, signos que se mantendrán durante los primeros años. Dichos acuerdos, para el FSLN, implicaron conservar espacios de poder y mantener las conquistas de la revolución; sin embargo, para los sandinistas el sacrificio fue mayor, porque les trajo desprestigio entre las masas trabajadoras.

El gobierno de Violeta Barrios fue un régimen de transición, que trató de consolidarse como un nuevo Estado en la sociedad, pero que no tuvo la capacidad para imponer su hegemonía, porque el antiguo régimen no había perdido del todo su ascendencia; dos características fundamentales de esa administración fueron el conflicto y la negociación. Durante dicho gobierno existió un sinnúmero de conflictos sociales y políticos, que tuvieron como respuesta por parte del Estado la negociación, que en muchas ocasiones se tradujo en incumplimiento de ambas partes. El régimen de Violeta Barrios tuvo tres objetivos muy claros: la transición entre dos gobiernos de diferente ideología, la reestructuración económica de la sociedad y la pacificación, objetivos que no pudo cumplir.

El gobierno de Violeta Barrios tuvo un compromiso con la burguesía que la apoyó en su campaña, privatizar las empresas y propiedades del Estado, pero esta obligación no podía cumplirla sin antes dar respuesta a la demanda sandinista, de solucionar el problema de las propiedades repartidas por ellos, y que no fueron debidamente regularizadas. Ambos procesos generaron muchas inconformidades entre los empresarios y los trabajadores, así como, por un lado, concentración económica y, por el otro, desempleo y pauperización de grandes sectores de la población. La estabilidad económica y social prometida por el gobierno unionista se tradujo en pobreza y marginalidad; le preocupó de sobremanera cumplir con los acuerdos y compromisos contraídos con los organismos financieros internacionales, y favorecer los intereses de algunos grupos.

La UNO gobernó siempre dividida. Por un lado, estaba el grupo de Violeta Barrios y Antonio Lacayo, que mantuvo acuerdos de gobernabilidad con los sandinistas; por otra parte, estaba la fracción más radical encabezada por Virgilio Godoy, quien pretendía eliminar a los sandinistas de todo espacio de poder, pero también buscaba desplazar del gobierno al grupo conciliador, aliándose con diferentes fuerzas políticas y militares. En determinado momento organizó un grupo de alcaldes y diputados con la firme intención de desestabilizar el poder Ejecutivo y tomar las riendas del Estado; también tuvo vínculos estrechos con los grupos rearmados, llamados *recontras*, que operaron en territorio nicaragüense, con quienes compartían la misma demanda de tomar el poder para el grupo de Virgilio Godoy.

La fracción de la UNO encabezada por Virgilio Godoy trató de desestabilizar el régimen de Violeta Barrios a través de varias acciones políticas y militares. Su propósito fundamental era romper la alianza entre el gobierno y los sandinistas, exigiendo la renuncia de algunos funcionarios: el ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, yerno de Violeta Barrios, empresario agroindustrial sin militancia política y con algunos nexos de amistad con los sandinistas; Carlos Hurtado, ministro de Gobernación, gente de confianza de Antonio Lacayo; Humberto Ortega Saavedra, jefe de las Fuerzas Armadas, hermano de Daniel con los mismos apellidos, dirigente sandinista de la vieja tendencia insurreccional; y René Vivas, jefe de la Policía Nacional, veterano militante sandinista de la Tendencia Guerra Popular Prolongada. La fracción godoyista estuvo ligada con los alcaldes y diputados que emprendieron un movimiento de conspiración en contra del gobierno en noviembre de 1990. Después de estas acciones se integró la Comisión Nacional del Movimiento *Salvemos la Democracia*, que tuvo como fin “rescatar el programa original de la UNO”, hacer cambios sustanciales en el gabinete y proclamar a Virgilio Godoy como presidente de la República; esta fracción también tuvo vínculos muy estrechos con los contrarrevolucionarios que retomaron las armas; estas tropas presionaron al gobierno con sus demandas concretas como

tierras para cultivar, apoyo para construcción de viviendas e instrumentos de labranza, pero también exigieron que el poder político pasara a manos del grupo godoyista. A partir de la segunda mitad del año de 1992, se unieron al proyecto desestabilizador Alfredo César Aguirre y Arnoldo Alemán, César Aguirre era político de familia acomodada, formado en los EE UU, que había colaborado con los sandinistas en su lucha contra la dictadura somocista, y también formó parte de la JGRN, fue también presidente de la AN de 1990 a 1992. Alemán, dirigente del Partido Liberal Constitucionalista, abogado, empresario cafetalero, ocupó el cargo de alcalde de Managua de 1990 a 1995; el proyecto desestabilizador de César y Alemán contó con la colaboración del gobierno estadounidense. Con la presencia de los grupos contrarrevolucionarios rearmados, conocidos como *contras*, la seguridad de los campesinos sandinistas se vio amenazada, por ello surgió como respuesta la organización de los *recompas*, quienes ofrecieron protección a los simpatizantes y militantes del sandinismo. El grupo *recompas*, constituido por militantes sandinistas y ex miembros del Ejército, organizados en principio como medida de defensa por el ataque frecuente de los comandos de rearmados, encontraron después puntos comunes, sus demandas eran similares: casas para vivir, más y mejores servicios para la población, tierras e instrumentos de labranza; este hecho provocó que existieran acuerdos entre ambos grupos, para levantarse en armas exigiendo al gobierno el respeto a los convenios de desarme.

El régimen de Violeta Barrios estuvo plagado de constantes levantamientos de tropas *recontras* y *recompas*, que de esa manera mostraban su inconformidad por la situación económica y social del país, que también pretendían presionar para conseguir prerrogativas económicas y políticas; la respuesta del gobierno en la mayoría de los casos fue a través de la fuerza, o cuando empleó la negociación, pocas ocasiones cumplió sus compromisos. Dichas tropas llegaron a compartir demandas y a combatir de manera conjunta, independientemente de sus diferencias ideológicas. Los movimientos de inconformidad por la situación económica del país también aparecieron de manera espontánea, tanto en el campo como en la ciudad, movimientos sociales que no tenían una dirección de los partidos políticos u organizaciones sociales concretas, pero que no compartían el proyecto económico del gobierno y sufrían las consecuencias de la pobreza y el desempleo.

El régimen de la presidenta Violeta Barrios implementó un proceso privatizador de las propiedades del Estado, favoreciendo a los grupos tradicionales de la burguesía antisomocista y al gran capital internacional, generando una nueva concentración de capital en pocas manos; como consecuencia provocó pobreza y desempleo en grandes capas de la sociedad, dando como resultado un clima de inconformidad, reflejado en las frecuentes huelgas de trabajadores, así como en los constantes movimientos urbanos y rurales que protestaban por la

política económica del régimen. La administración de Violeta Barrios tuvo también como objetivo fundamental, el desmantelamiento del Estado benefactor, al igual que en otros países de América Latina.

Las reformas constitucionales que empezaron a discutirse a finales de 1993, generaron un revuelo político importante, resultando un enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, también la profundización de las diferencias entre las dos corrientes del FSLN ya señaladas, ID y MRS. El Movimiento de Renovación se reconoció como producto de dichas reformas que pretendían un mayor equilibrio entre los poderes del Estado, regular y definir de mejor manera los derechos políticos, y concedían a la Asamblea Nacional el derecho de establecer nuevos impuestos y condonar otros. El conflicto por las reformas constitucionales se prolongó hasta el mes de julio de 1995, en que ambos poderes acordaron promulgarlas.

La cuarta parte la hemos dedicado al estudio de Alianza Liberal y su arribo al poder; en esta parte analizamos las elecciones de la Costa Atlántica del 27 de febrero de 1994, que tuvieron singular importancia, porque a partir de ellas se pudo vislumbrar el comportamiento del electorado en los comicios posteriores; los resultados permitieron observar el aniquilamiento de la UNO como proyecto gobernante, asimismo se advirtió el surgimiento de una nueva fuerza electoral en el Partido Liberal Constitucionalista con Arnoldo Alemán a la cabeza; también, hemos podido descubrir cómo había afectado la división interna en los sandinistas, repercutiendo en una ligera disminución en su votación.

El Partido Liberal Independiente convocó, a mediados de 1994, a las fuerzas liberales para organizar una alianza con el propósito de presentar un candidato común para las elecciones de octubre de 1996; dicho proyecto tomó fuerza a partir de los primeros meses de 1995. Dentro de la dirección de ésta quedaron tecnócratas egresados de universidades extranjeras, y su base social estuvo constituida por campesinos de subsistencia, finqueros, artesanos, pequeños comerciantes, capas medias, además de las masas desempleadas y empobrecidas. A mediados de 1995, Alianza Liberal presentó al ex alcalde de Managua, Arnoldo Alemán, como su candidato a la presidencia de la República. Alemán representaba al nuevo empresariado, de raíz liberal, pero de pensamiento profundamente conservador. Su discurso fue antisandinista, antioligárquico y antigubernista, buscando aglutinar sectores sociales inconformes con la política económica de Violeta Barrios. El discurso de Alemán fue directo y sencillo tratando de influir en pequeños y medianos productores, en comerciantes, técnicos y profesionales de clase media, que fueron afectados por las políticas económicas de los dos regímenes anteriores.

Arnoldo Alemán logró el 51.10 % de los votos en las elecciones del 20 de octubre de 1996, un amplio margen sobre su más cercano competidor Daniel

Ortega, quien consiguió el 37.75 %. El triunfo de Alemán se tradujo en una mayoría de diputados para el Congreso (42), asimismo logró un número importante de alcaldías (91), mientras que el FSLN concentró su poder en los municipios del norte del país, obteniendo un total de 52, en cuanto a diputados alcanzó 36. Estos resultados confirman el reacomodo y recomposición de la derecha nicaragüense, integrada por fracciones de la vieja burguesía somocista, nuevos empresarios, sectores importantes de la pequeña burguesía y capas medias. Alianza también se abocó a construir una nueva ideología para la sociedad nicaragüense, auxiliándose de la jerarquía católica y de algunos intelectuales conservadores, que construyeron un nuevo cuerpo ideológico a través de la educación, la cultura y los medios de comunicación.

Para las elecciones de octubre de 1996, la Alianza Liberal, con Arnoldo Alemán a la cabeza, realizó una propuesta atractiva para las masas pauperizadas y desempleadas del país, entrando a la disputa de las bases sociales, que en otro momento fueron sandinistas. Dichas elecciones demostraron que el discurso y el proyecto político de AL convencieron a grandes sectores de desempleados e importantes fracciones de masas empobrecidas. La UNO, como opción política, fue disuelta por sus propias contradicciones, no presentando una fuerza real en el proceso electoral de 1996. Pese a la escisión de 1994 y a la ausencia de un auténtico proyecto político alternativo, el FSLN conservó una importante cuota de votantes, que lo mantuvo como la segunda fuerza política del país.

El gobierno liberal trató de establecer sus nuevos postulados que pretendían el rescate histórico del liberalismo, así como la reivindicación de la dictadura somocista; también les preocupó rescatar la dirección de la economía y beneficiar a los grupos empresariales afines con sus ideales.

Cabe señalar que la transición democrática en Nicaragua tuvo un escollo importante con la existencia de grupos armados en la sociedad. Al haber fracasado los dos intentos de pacificación de parte de los sandinistas y del régimen de Violeta Barrios, grupos importantes de la población mantuvieron en su poder las armas, impidiendo la consolidación del Estado de derecho. El gobierno liberal impulsó el diálogo y los acuerdos de gobernabilidad principalmente con el FSLN, llegando a firmar en los primeros meses de su gestión una nueva ley sobre la propiedad.

Al final de esta parte hacemos un análisis de los principales postulados del gobierno liberal, resaltando el rescate histórico que hace del liberalismo y en particular de la dictadura somocista. Asimismo, ofrecemos una reflexión sobre las limitaciones de la democracia nicaragüense, como consecuencia del fracaso del proceso de desarme y pacificación de la sociedad, destacando la supervivencia de los grupos armados en la población. Finalmente hay que señalar que en los primeros meses del gobierno liberal existieron acuerdos políticos de gobernabilidad, principalmente con el FSLN.

COMENTARIOS FINALES

El gobierno de los Estados Unidos encabezado por George W. Bush sigue imponiendo su política intervencionista en Nicaragua, contando con el consentimiento del gobierno liberal de Enrique Bolaños, cuyo merito principal es haber impulsado una política económica afín con los intereses de las empresas maquiladoras.

En las últimas décadas, la política nicaragüense se ha significado por la ausencia de ética de parte por sus dirigentes, en particular los líderes de las tres principales fuerzas políticas: Daniel Ortega del FSLN, Arnoldo Alemán del PLC y Enrique Bolaños de la GUL (Gran Unidad Liberal); éstos se han visto involucrados en casos de corrupción, abuso de poder y tráfico de influencias.

La cultura política autoritaria se ha impuesto sobre las formas y principios democráticos; por décadas se ha avivado el culto a la personalidad de los dirigentes, desatendiéndose el fomento de principios y valores democráticos. A los partidos políticos les falta creatividad para desarrollar programas y proyectos acordes con las necesidades y problemáticas del país; están más interesados en vender la imagen de sus candidatos y dirigentes a través de los medios de comunicación. Desafortunadamente las figuras de Daniel Ortega, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños ocupan un lugar privilegiado y determinante para el rumbo de la nación.

Las recientes derrotas electorales del sandinismo exigen una crítica rigurosa, así como un replanteamiento de nuevos programas y proyecto sociopolíticos, asimismo buscar nuevas formas de lucha, acordes con los problemas que aquejan a la sociedad nicaragüense actual, sumida en el desempleo, la pobreza y la injusticia social.